**ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE
COMO ACCEDER A LOS NUEVOS MODELOS
DE JUSTICIA Y PROCESO CONTEMPLADOS
EN NUESTRA VIGENTE CONSTITUCIÓN
PARA EL LOGRO DE UNA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.**

PROF. ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO*

* Conferencia dictada el 28 de abril del 2000 en el evento Patrocinado por el Instituto de Estudios de Derecho Procesal de Acarigua, Delegación del Colegio de Abogados del Estado Portuguesa.

** *Considérations sur le Government de Pologne*, cit. por Rafael Vargas G., Jean Jacques Rousseau, Política y Cultura, a su vez cit. por Morello, Augusto M., La Reforma de la Justicia, Librería Platense, Argentina, 1991, Isbn 950-536-040-1.

“La Justicia es, como la salud, un bien del cual se goza sin sentirlo, que nunca inspira entusiasmo, y cuyo precio se siente después de haberlo perdido”

Jean Jacques Rousseau¹

Como ya debe resultar de todos conocido, la nueva Constitución Nacional² ha introducido profundos cambios en una serie de instituciones y conceptos³ que interesan a todo el entorno Nacional, pero por supuesto con mayor énfasis a nosotros los abogados y a los demás hombres relacionados con la Justicia.

Entre esos importantes nuevos conceptos y cambios, están los que atienen a los de Justicia, Proceso, Tutela Judicial efectiva, debida protección de los derechos procesales ciudadanos, etc. entre otros.

Todas estas modificaciones, como procuraremos ponerlo de manifiesto en el tiempo que se nos ha concedido para esta grata disertación ante Uds., confieren un especial papel protagónico al Poder Judicial y con ello a los Jueces y a nosotros los abogados.

En primer lugar, creo necesario comenzar por destacar que todos estos cambios y mutaciones responden a varios factores, no son pues

¹ *Considérations sur le Gouvernement de Pologne*, cit. por Rafael Vargas G., Jean Jacques Rousseau, Política y Cultura, a su vez cit. por Morello, Augusto M., La Reforma de la Justicia, Librería Platense, Argentina, 1991, Isbn 950-536-040-1.

² Preámbulo y artículos (Arts.) 2, 7, 26, 49, 253, 255, 257 y 258 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CN), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (GO) N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999 y la cual fue modificada por errores de transcripción y hoy republicada en la misma citada GO con el N° 5.453, Extraordinaria, de fecha 24 de marzo del 2000.

³ Al respecto, nuestro trabajo “Las modificaciones de la Constitución Nacional. Aproximaciones en torno a algunos de sus efectos, en especial en lo atinente a los conceptos de “Norma Jurídica, Justicia, Administración de Justicia, Función del Poder Judicial y Proceso”, entre otros”, Apéndice en la obra, *III Jornadas de Derecho Procesal Civil*, Aristides Rengel Romberg, Edit. Fundación F. Pérez Llantada SJ y Fondo Edit. UCAB, Caracas, 2000, p. 149 ss.

producto de una determinada posición de los que ahora reivindican haber cambiado el Estado y la Democracia venezolana. Lo que sí puede ser cierto es que ellos tomaron la avanzada que no supieron encaminar los otros muchos que sentían desasosiego por cómo y en qué forma venía cumpliéndose la justicia y el sagrado ministerio de aquellos a quienes se tiene confiado implementarla.

Podemos afirmar, como lo señala acertadamente Adolfo Gelsi Bidart⁴,

“...si hay una nota que caracteriza toda nuestra época, es la del cambio acelerado, o, si se prefiere, la de la aceleración en el cambio. El cambio es propio de todo lo que vive en el tiempo y ha adquirido en el nuestro, un ritmo de aceleración tan acentuado, como tal vez nunca lo había experimentado el hombre. Se trata de un cambio universal que lo afecta todo, y, además, en profundidad, la transformación no queda en la superficie, ni, menos, en la apariencia, ni es propia de sectores del mundo o de la humanidad, ni patrimonio exclusivo de la juventud... El derecho, cauce de la vida social, no puede escapar a la necesidad de cambio profundo, renovador, so pena de que salten en pedazos las estructuras, que ya se están resquebrajando”.

Por ello no debe causarnos extrañeza, que no obstante contar con un Código de Procedimiento publicado apenas en 1987, con numerosas modificaciones a instituciones tradicionales en nuestro proceso civil, se esté pensando, y en ello no dudemos en afirmar que todos así lo sentimos, en la necesidad de cambiar muchas de sus estructuras e instituciones, porque, consideramos además que ese ordenamiento no satisface las necesidades de justicia, porque el modelo de proceso que regula no conduce a una justicia rápida y eficaz, porque, finalmente, en este mundo de comunicaciones globales, cada vez mas informado, nos enteramos que en otros países hay modelos de procedimientos más eficaces y expeditos que los contemplados en nuestro Código adjetivo.

De otra parte, por igual, todo proceso de cambio político institucional, que se ha declarado revolucionario, aun cuando pacífico y de-

⁴ Proceso y época de cambio, en Libro Homenaje a Amílcar Mercader, Problemática actual del Derecho Procesal, Editora Platense, Argentina, 1971, p. 421 ss.

mocrático, y ello es lo que hemos vivido y seguimos viviendo después de nuestras últimas elecciones, supone necesaria y correlativamente un colapso de las instituciones tradicionales. En especial podemos decir que en nuestra América Latina el fenómeno revolucionario no es una novedad, pero conviene encarar la situación del Poder Judicial, de la Justicia y del Proceso a ese respecto.

Comenzaremos por decir que si bien el Poder Judicial no es, de entre los tres Poderes clásicos, el que hace la revolución cuando esta parte de los poderes constituidos; ni le corresponde en principio concebirla, ni aún ejecutarla en sus líneas fundamentales, vale la pena señalar algunos aspectos básicos de su relación con aquélla.

En materia de revolución, señala el maestro Gelsi⁵

“... desde el punto de vista jurídico y en lo que interesa al proceso, cabría distinguir entre el concepto puramente formal modificación violenta de los fundamentos jurídicos de un Estado que pone el acento en los medios (la violencia) utilizados para lograr la transformación, y el concepto material o sustantivo, “modificación profunda, de conjunto, de las estructuras de ese Estado, <que no se limita a cambiar los gobernantes, sino que introduce un nuevo estilo político, o un nuevo modo de vida socio-política, o instituciones totalmente nuevas o absolutamente renovadas>”.

Por ello, según el citado Profesor, pierde sentido, aún desde el punto de vista jurídico, el medio con el cual se lleva a cabo aquella “la violencia o el modo pacífico”; la ruptura mediante un “acto revolucionario” en el procedimiento de cambio de gobierno según el ordenamiento jurídico anterior o la continuidad de éste, aunque no en los fines perseguidos.

Todo lo expuesto pone de manifiesto que el Derecho no queda al margen de las transformaciones, sino en el seno de las mismas, como efecto e incluso como causa de ellas y también que con o sin revolución, el Derecho es cauce social indispensable, y por ende medio jurídico por antonomasia para su determinación en el conflicto concreto –el proceso– es siempre necesario.

⁵ *Opus cit.* p. 426.

Ahora bien, lo dicho, no me hace convicto y confeso de que los cambios que debemos desear, los que deben y tienen que producirse en torno a los conceptos de Justicia, Proceso, Tutela efectiva, etc., son los que deben producirse necesariamente como consecuencia de lo que ahora han impuesto los gobernantes de turno y sus seguidores, o de que estemos de acuerdo con los métodos para llevarlos a cabo y proclamados para afirmar que con los mismos se producirán esos cambios, como los más adecuados y necesarios⁶.

Pero tampoco podemos dejar de reconocer, cuando menos, que ha sido durante la vigencia del mandato que ahora se ejerce el que se ha invocado la necesidad de tales cambios y se han consagrado sus enunciados en un nuevo texto constitucional, promulgada además con la anuencia de una considerable mayoría de votos de nuestros conciudadanos, que cuando menos en ese momento los apoyaban, y con lo cual se ha puesto de manifiesto la general postura de rechazo a las instituciones hasta entonces existentes, a los oprobios e injusticias que se habían venido cometiendo durante los últimos años, las cuales nadie podrá negar; a la existencia de leyes e instituciones anacrónicas y vetustas y a la evidente pérdida de todo control moral en la sociedad, desaguisados y entuertos estos con los cuales estuvo obligada a convivir nuestra sociedad civil durante los últimos pasados años y bajo las administraciones de los gobiernos auspiciados por la hasta entonces partidocracia tradicional existente y sobre lo cual, cabe destacar que nuestra clase media pensante y dirigente, nada hizo por eliminar o por luchar contra ese estado de cosas.

No quiero afirmar tampoco con esto que esas soluciones aportadas sean las adecuadas para solventar los problemas que nos aquejan, ni los mejores o más deseados caminos para que ellos produzcan los beneficios anunciados.

Por último, quiero ser igualmente enfático, en todo caso, en que la crisis enunciada, no necesariamente encuentra su fuente y causa eficiente en nuestro modelo de proceso ni en sus defectos, ni en la justicia chucuta que con él se lograba, sino que la gran dosis de causa eficiente

⁶ Por el contrario, en nuestro comentado trabajo, afirmamos que es parte de nuestra convicción que tales modificaciones se introdujeron hasta inconscientemente y sin medir las graves repercusiones que ellas podrían traer.

de todo ello debemos encontrarla en los hombres llamados a administrarla y en la postura cómoda de una sociedad, que si bien ausente de problemas económicos graves en la gran mayoría de los que la integraban, mantenía el valor justicia relegado en el catálogo de sus necesidades a un puesto que jamás debió corresponderle, bajo la excusa de que todo lo arreglaba o pretendía podía ser arreglado con dinero.

Por ello, pues, cuando menos era imaginable que quienes pretenden ahora reivindicar un nuevo Estado, crear la llamada Va. República, piensan por igual en procurar cambiar las cosas en lo atinente a la justicia, al Poder Judicial, y a todo cuanto a ella se refiriese, interpretando así el sentir de un gran grupo de nuestro pueblo, a quienes precisamente se hacían mas extraños y añorados los conceptos de justicia, verdad procesal, equidad, normas ajustadas a las realidades sociales, tutela efectiva de los derechos de los justiciables, para procurar que los mismos retomen sus cauces deseables y que se desentumezcan de su letargo por la inutilidad en que se las contuvo durante tantos años.

Pero lo grave e importante de considerar en estos casos en que se proponen y someten a consideración profundos cambios, más cuando vienen precedidos e impulsados por movimientos que se dicen revolucionarios, generalmente imbuidos de ideas fijas, sordos a todo consejo y ciegos ante realidades ya probadas, es tomar debida conciencia **de** porqué, cómo y para que se quieren esas transformaciones y nuevas instituciones, a fin de que con las mismas se procuren efectivos logros y sin que puedan convertirse en perversión social sin obtener fines útiles y trascendentes.

Para ello, lo primero que debe considerarse, en particular cuando el manejo y conducción de los asuntos sujetos a modificaciones y cambios depende de factores humanos, como es el caso de lo que nos corresponde analizar, debe ser ponderar si efectivamente se cuenta con adecuados ejecutores, si se ha logrado la conciencia de aprobación social de los mismos, so pena de que todo cuanto se haga no resulte ser más que mascaradas para acceder a otros cambios en lo social o político, indeseados o no tempestivos y, en definitiva, causa de peores males de los que se procura librar a esa sociedad.

Precisamente por ello, en momentos como estos, en que se ponen de manifiesto esos graves conflictos y desagradados sociales, en que

se sugieren y proclaman esos cambios y mutaciones en las estructuras sociales es cuando toma un papel protagónico en los procesos democráticos el Poder Judicial y con él también los Jueces, y adquiere papel preponderante y actualizado entrar a considerar asuntos tales como la necesidad de buscar un nuevo modelo de justicia, el dar otro fin y contenido al Proceso Judicial, el procurar obtener la efectividad de la tutela judicial, la igualdad ante la justicia y en todo caso buscar como ajustar las instituciones judiciales y procesales a todos esos cambios.

Repetimos, es en estos casos de conflictividad, donde los Jueces y el Poder Judicial, con especial prestancia, adquieren protagonismo inusitado, provocando impensados efectos en el colectivo, pues resultan ellos, a pesar de la crisis en que pudieren estar inmersos, los que pueden garantizar “Seguridad Jurídica, calidad de vida, certeza y justicia” por considerar y entender el colectivo, que son ellos los representantes del poder constituido que razonablemente pueden modelar, sugerir y adaptar dichos cambios con mayor serenidad y sensatez.

Como destaca Herrendorf⁷:

“...cualquiera que sea el sistema jurídico imperante, el juez siempre será un protagonista activo y totalmente insoslayable del Derecho y de la Justicia, del mismo modo que su sentencia es la forma en que el Derecho se muestra así mismo, vitalmente”.

Y concluye destacando:

“Veremos que el Juez integra con su pensamiento el ordenamiento jurídico y de ese modo le da vida”.

El porqué toma esa especial prestancia el Poder Judicial y todo lo relacionado con los “aspectos vinculados a la justicia y al proceso”, encuentran clara explicación en las palabras de la Profesora Amparo Oviedo Arbeláez⁸:

⁷ Herrendorf, Daniel, El poder de los Jueces. Cómo piensan los jueces que piensan, Abeledo Perrot, Argentina, 3a. Edición actualizada 1998, Isbn 950-20-1103-1, p 24 y ss.

⁸ Oviedo A., Amparo Alicia, Proceso, Justicia y Libertad, Publicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Edit. Javegraf, Colombia 1997, Colección Profesores, N-23, Isbn 958-9176-34-8, p. 16 ss.

“El nuevo Derecho Procesal debe mirarse como una de las ramas del ordenamiento jurídico que presenta los mayores fenómenos de crítica y de crisis. Esto porque como ciencia autónoma dirige sus trabajos hacia la creación de métodos de juzgamiento y tiende a estabilizar instituciones aptas para el logro de la adecuada administración de justicia La crisis de las instituciones se manifiesta de manera especial cuando se hace nugatoria burocrática y compleja la administración de justicia ... Pero no solamente se critica la cuestión de la administración de justicia como ejercicio del poder de juzgar sino como problema de conocimiento. Es decir, como fenómenos de investigación y análisis, ya sea desde el punto de vista de las normas existentes para conocer su significado, ya sea el de la elaboración de nuevas formas que perfeccionen el desarrollo de los principios y reglas admitidas por la comunidad como válidos y necesarios a la recta administración de justicia. No en vano el profesor Calamandrei titula su obra “Proceso y Democracia”, porque el sistema del poder está directamente ligado a la tarea más importante del Estado cual es la de juzgar”.

Creo que en nuestro país, por más que sintamos gran decepción por la forma como se ha venido cumpliendo la administración de justicia, con fundamento en el proceder de muchos de nuestros jueces, es menester tener claro que sólo el Poder Judicial puede garantizar la debida marcha de los procesos democráticos, de los cambios de estructuras, poner freno a los abusos, etc., todo ello, aún concluyendo con que a nivel de muchos países del mundo actual, pero en especial en nuestra Venezuela, como ya se lo ha señalado en variadas oportunidades: nadie puede discutir que la administración de justicia no puede seguir en las condiciones actuales y que la misma deja mucho que desear.

Pero en beneficio de esclarecer la tarea que me he propuesto al examinar estos tópicos, y dado que ahora con esta conversación con Uds. resultan ser ya varios los eventos que vengo dedicando a ello, antes de que se me tilde de que estoy con los partidarios de la nueva república o que comparto con ellos muchas de sus descabelladas ideas, y a quienes en mucho he enfrentado por sus deplorables proceder y falta de claros rumbos en la conducción del país, debo manifestar que mi posición, en lo que atiene precisamente a los cambios y modificaciones en materia

de Justicia, Proceso, Poder Judicial y roles del mismo socialmente, dista en mucho de las simples proclamas de principios, enunciado de instituciones y figuras y porqué no, inclusive puesta en práctica de insensatas reformas, carentes de toda sustentación legal, impuestas impensadamente en sus consecuencias y producto de una atronadora actitud por marcar una diferencia, que se pretende hacer notoria con los gobiernos y gobernantes anteriores, sin importar “qué” ni “cómo” se lo logre.

Así, pues, que no enfrentamos a quienes consideran debe procederse a esos cambios, ni a la necesidad de realizarlos en la extensión y bajo los parámetros que han sido consagrados en la Constitución, pero no estamos convencidos de que en verdad las formas en que se proponen sean realizados sean las más convenientes, ni las que puedan implementarse con la urgencia que en algunos aspectos se requiere hacerlo.

Nos sentimos obligados en alertar que los precitados cambios ahora tildados de angustiosos e indemorables, no pueden ser objeto de improvisaciones, ni puede esperarse que ellos se produzcan sólo por la fría modificación del texto de la carta magna. En primer lugar, debemos analizar sensatamente si lo que debe cambiarse son los sistemas y conceptos o si lo procedente resulta ser revisar las maneras como el resto de los Poderes del Estado entienden y respaldan la función del Poder Judicial, y si por igual y en puesto primordial, lo que procede es hacer un sensato análisis sobre si los políticos del status, incluyendo los del Gobierno, tienen clara idea sobre la importancia y destacado papel que corresponde al Poder Judicial en la sociedad e inclusive en el apoyo y sustento del sistema político impuesto o por imponer.

Además de deber tener todo ello en claro, es menester para poder auspiciar esos cambios y contar con el éxito, el tener los hombres necesarios para implementarlos e implantarlos y contar con la aceptación que a ellos se les preste en el medio social donde serán impuestos.

La justicia, no es de esos bienes que se obtiene automáticamente por posturas o declaraciones, requiere entender que debe tenerse por justo, quiénes y cómo la aplicarán adecuadamente, por ello no puede improvisarse ni pretender sacar de la nada a los hombres que la hagan viable y útil, he allí el gran peligro de errar al pretender esos cambios.

I. EL NUEVO CONCEPTO DE JUSTICIA Y EL ROL DEL JUEZ ANTE AQUÉL

Quizá el más grande de los cambios que propicia el nuevo instrumento constitucional es el nuevo concepto de norma jurídica justa y del cual deviene el aún más romántico y seductor de que con aquella se logrará “la justicia social y un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.

Como lo destaca el texto constitucional, la nueva organización de la República debe procurar y velar porque la misma sea un ente democrático, y social de Derecho y de Justicia para lograr que la prestación de su servicio sea efectuado en forma gratuita, accesible, y la que así se obtenga sea imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles⁹.

En definitiva, para que se obtenga la “justicia social” y en tal sentido, se entiende por ello, en los sistemas doctrinarios que analizan estas materias, el que la interpretación y contenido del mandato de la ley, no es el que resulta de su simple texto expreso, sino que debe ahondarse en el fin mismo de la norma y de lo que quien legisló tuvo en mientes para regular una determinada conducta, todo con miras a que con ello, en cada caso, se logre un perfecto acto de justicia, con lo cual se termina con el postulado de que justicia y ley son una misma cosa, conforme a los viejos sistemas existentes.

En el anterior sistema, se sostenía que cuando el Juez aplicaba la Ley al caso concreto, mientras más se apegaba al texto de la norma, se entendía cumplía el más perfecto acto de justicia. El postulado de justicia, coincidía con el mandato legal, pues el más alto sentido de la justicia se entendía recogido en la voluntad legislativa¹⁰.

⁹ Art. 26 CN.

¹⁰ Por supuesto que ello es lo que debe ocurrir en la teoría, aún cuando no sea necesariamente así en la práctica, pues no necesariamente la solución más próxima a la justicia es la recogida en el precepto legal.

II. EL NUEVO PERFIL DEL JUEZ QUE REQUIEREN LOS CAMBIOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

A diferencia de lo que acontecía con el Juez del sistema de la jurisdicción de derecho, de la Justicia apegada al texto frío de la Ley, en el nuevo sistema proclamado por el constituyente, solo si la norma legal se compadece plenamente con la norma moral, y tiene aceptación en el colectivo, debe ser obedecida por el Juez por sobre cualquier otra consideración, solo esa será una norma justa plenamente.

Con el nuevo sistema propuesto, se da por tierra con todo lo que institucionalmente existía, y así lo venimos advirtiendo desde que conocimos en forma el texto de la Constitución respecto a tales temas¹¹.

A diferencia del sistema que ahora se abandona, donde el papel fundamental del Juez y del proceso radicaba en lograr aplicar de la manera más perfecta el texto de la Ley y con ello y sólo por ello se cumplía la mejor forma de justicia, en la nueva concepción de justicia social y equitativa, se encomienda a los jueces una difícil e importante tarea, esto es, que indaguen previamente si ese mandato es el más ajustado al sentimiento moral del pueblo, sobre la consecuencia jurídica de ese dispositivo, el cual como tal requiere ser el de mayor acento moral para ese lugar y tiempo determinados, y de no serlo, el Juez no debe aplicarlo o deberá ajustarlo para que lo sea, esto es, acomodará la Ley al concepto de justicia en función de la moral.

Y aquí viene el primer quid. Para lograr ese deseable propósito, requerimos y necesitamos un Poder Judicial que cuente con recursos humanos especialmente preparados y aptos, con jueces no solo activos, eficientes y debidamente preparados, sino proclives a lograr y producir esos cambios, convencidos de que ellos son necesarios y posibles, lo que en palabras de Berizonce convierte a ese Juez en un juez “activista”, que no sólo demuestra tener una cualidad puramente mecanicista para lograr esos propósitos, sino que tengan un actuar enderezado a la obtención de una finalidad en la que predominan los valores fundamentales¹².

¹¹ Al respecto nuestro citado trabajo sobre los Cambios constitucionales, citado supra.

¹² Pero seamos sinceros. Detengámonos a pensar siquiera unos minutos sobre la quimera que resulta imaginarnos los hombres ciegos y de espada en ristra, que realizarán esas tareas, cuando que en el sistema ahora abandonado, donde simplemente debían encuadrar los he-

El juez que pronuncia sus decisiones y cumple sus deberes funcionales diligentemente, dentro de los plazos legales, es cierto que podrá ser considerado “activo”; por oposición a “pasivo”, que lo implica como inactivo, por su quietud e indiferencia, pero en cambio podrá ser “activista” en positivo, si además de cumplir diligentemente con sus deberes, a partir de una visión progresista, evolutista, reformadora, sabe interpretar la realidad de su época y le confiere a sus decisiones un sentido constructivo y modernizador, orientándolas a la consagración de los valores esenciales en vigor¹³.

Precisa por igual señalar que también encontraremos el que algunos de dichos jueces sean activos activistas “en negativo” cuando en cambio de mirar hacia el progreso, están comprometidos con el *status quo*, y colocan lúcidamente su empeño y actividad para oponerse a todo lo que es cambio o transformación social, y finalmente podrán haber también “jueces neutros”, en el sentido de que con su postura nada agregan de contenido o sustancia a la actividad.

Por lo expuesto cabe destacar que en esas actitudes el Juez se comporta como un ser con “políticas”, esa politicidad es un rasgo consustancial a la misión jurisdiccional y la sentencia constituye el “propio acto político” y de imperio, en tanto se dicta en nombre del Estado, además de tener una resolución que escoge entre varias alternativas, lo que la erige en un acto de gobierno que, por añadidura, implica una programación del comportamiento social.

Empero, como lo señala Berizonce¹⁴ tal politicidad no significa “partidismo” ni sectorialización. Mas aún, puede decirse que el Poder Judicial, integrado por todos los Jueces, es, igualmente, un poder político, al menos en cuanto órgano del Estado y también por las funciones que le están asignadas, por ello, al menos en la Jurisprudencia Argentina, sin ambages, se ha dicho “Los jueces han de poseer <sensibilidad

chos en los presupuestos de la norma, sin hacer siquiera ningún otro juicio de valor, no lo lograban, ¿qué podemos esperar entonces de a los que ahora confiaremos esas titánicas gestiones? ¿Dónde están los hombres preparados siquiera a nivel elemental para razonablemente esperar mejores resultados en la aplicación de la justicia y ponderarla con la equidad?

¹³ Berizonce, Roberto O, Derecho Procesal Civil actual, Librería Editora Platense y Abeledo Perrot, Argentina, 1999, Isbn 950-20-1187-2, p. 364.

¹⁴ *Opus cit.*, p. 365.

política> y deben recurrir a ella, sobre todo cuando analizan las bases de la organización del Estado democrático”¹⁵.

Lo importante, además de todo lo dicho es que ese activismo se encarne no en uno sino en muchos de los integrantes del Poder Judicial, pues de lo contrario tales conductas no pasan de ser meras actitudes individuales, que no alcanzan a modificar el común denominador. Lo trascendente es hablar de una magistratura activista, no de unos activistas en la magistratura.

Ese “activismo”, veremos, además que se verifica principalmente, aun cuando no de manera exclusiva, a través de la sentencia en cuanto a las reglas jurídicas materiales pero también en la conducción del procedimiento, pero en uno y otro campo veremos que hay límites precisos que no pueden ser transgredidos por el Juez consciente y racional.

Como podemos visualizar en este estado de las observaciones y comentarios precedentes, pretender el cambio en las estructuras de justicia, hacer realmente efectiva la tutela judicial de los derechos, por vía de las declaraciones de esos nuevos principios y postulados, no parece del todo acertado, o quizá, cuando menos podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el camino escogido no resultará ni el más fácil, ni el más expedito, pues supone una serie de requisitos, de elementos y de sujetos, especiales, preparados para llevar adelante esas modificaciones, y con los cuales sin lugar a dudas y sin llamarnos a engaños no se cuenta, y debemos adicionalmente, caer en cuenta de que formarlos y hacerlos no puede pretenderse tarea de unos días, ni del tiempo de urgencia en que se requiere el continuo e indispensable devenir de la justicia.

No es que dudamos de nuestros hombres, ni de muchos de los que ahora con deleite parecen disfrutar del ejercicio del poder, que no cumplir con la delicada tarea que ello impone, pero recordemos que para afrontar la crisis que pretendemos conjurar no se necesita uno, ni diez ni cien hombres, sino unos cuantos miles adecuadamente preparados y formados.

Insistiremos una y otra vez, lo más importante en la actividad judicial, es el Juez, porque como señala Carlos Cossio¹⁶ “el derecho en par-

¹⁵ Fallos de la Corte Suprema Argentina, citados en Berizonce, *opus cit.*

¹⁶ Carlos Cossio, *El Derecho en el Derecho Judicial*, segunda edición, Abeledo Perrot, Argentina, 1959, p. 53.

te, es el propio hecho del juez ... (porque) no es algo hecho y concluido, sino algo que se hace siempre y quien lo tiene que hacer en sus términos más inmediatos es principalmente el Juez es en el juez donde están como realidad los sentidos jurídicos de justicia o de orden, etc. que tienen que ser vivenciados cuando se aplican las leyes...”.

III. REQUISITOS DEL SUJETO JUEZ Y DE SU ACTIVIDAD EN LA NUEVA CONCEPCIÓN DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL

Para tener más claro cuanto decimos, continuemos examinando lo que el mismo Profesor Berizonce analiza seguidamente en su citado trabajo, esto es, cuales son las formas más comunes de manifestación de ese “activismo positivo” del cual requiere estar dotado el juez prototipo y conveniente para los cambios propuestos o para cualquier otro ejercicio de la magistratura en los tiempos actuales con miras al buen logro de la justicia.

En primer lugar, cabe destacar que esa postura de “activismo” se puede poner de manifiesto en multitud de formas, tantas cuantas variantes de los fenómenos jurídicos se puedan imaginar, pudiendo concluirse que no hay un solo modelo de activismo o de juez activista, sino una multiplicidad de modos en que tal postura se expresa.

En segundo lugar, vale la pena destacar marcadamente, que en el nuevo sistema propuesto, en adición, la función del juez no es meramente mecanicista en el sentido de que se limite a solo aplicar las normas jurídicas -más que la ley- para subsumir el caso concreto en los supuestos de aquella, cumpliendo así con la mera función garantística de los derechos subjetivos privados.

Mucho más allá de ello, la labor jurisdiccional tiene como característica la “interpretación creativa”.

Ese protagónico desempeño, toma su máxima expresión tratándose de la defensa y control constitucional, por cuyo conducto los jueces se convierten en arbitradores y garantes del catálogo de valores constitucionales y aún del sistema político institucional que este organiza, a través de los derechos públicos subjetivos.

La crisis de la Ley, concluye Berizonce, no sólo por la inflación legislativa, sino también porque cada vez más se presenta como un penoso compromiso entre intereses sectoriales, no ha sido ajena a aquella evolución que condujera al relanzamiento de la judicatura y al reconocimiento de un verdadero “poder” para el ejercicio de las potestades de derecho público, que poco tiene que ver con el “poder inanimado” del modelo del cual nos hablaba Montesquieu¹⁷.

En adición toca analizar un segundo asunto de particular interés y que choca con el sistema tradicional de la llamada “jurisdicción de derecho” y con la cual hubimos de convivir muchos años. En efecto, en esa nueva función de interpretación de la realidad social y de la moral que en ella flota, la función del juez se convierte en verdadera generadora de las normas jurídicas, esto es, en el nuevo sistema, ahora el Juez no sólo interpreta y decide sino que crea el derecho.

Pero aclaremos estos conceptos. Tanto antes como ahora, cuando el Juez aplicaba la norma al caso concreto, suponía un ejercicio de su discrecionalidad que implica siempre y necesariamente la creación de una norma de rango inferior, que viene a regir el caso concreto. La discusión entre uno y otro de los sistemas, no reside pues en este punto, sino en determinar si en la nueva concepción de las funciones del Juez, como tal intérprete participa en realidad de la función legislativa *latu sensu*.

Realmente resulta harto difícil distinguir entre interpretación y creación (descubrimiento del derecho), en primer término conviene destacar que toda interpretación contiene por su consustancial discrecionalidad, un acto –*latu sensu*– de creación, pero no es este el sentido que pretendemos destacar ahora con la nueva función judicial, sino otro diverso que tendencialmente, cada vez más lo acerca hasta confundirse, con la creación de sustancia y contenido legislativa, porque como demostrara CAPPELLETTI, no existe una diferencia de esencia, sino en todo caso de grado, entre la creatividad del Legislador y la del Juez.

Mas, debe destacarse y aclararse, para unos muchos que pretenden que con ello lo que se persigue es otra cosa, que por ese solo hecho tampoco podemos afirmar que el juez se transforma en legislador al

¹⁷ *Opus cit.* 366. En igual sentido como lo hacemos notar en nuestro trabajo sobre estos temas, los Federalistas norteamericanos, defensores a ultranza de la majestad del poder judicial, no obstante, lo concebían por igual como un poder inerte, manso y no peligroso (Hamilton, *The Federalist*, citado por Herrendorf, p. 25)

interpretar creativamente el derecho (descubriendo el derecho), porque nunca le estará permitido establecer *ex novo* la norma.

En efecto, el juez podrá inteligir la norma, esclarecerla, inclusive integrarla o enriquecerla hasta transformarla, pero nunca estatuir la per se, porque ello es misión indelegable de la Ley. El legislador siempre ejercerá sus funciones *in abstracto*, para regular para la generalidad, mientras que el juez, hará tales pronunciamientos sólo para el *caso concreto*.

¿Mas, que ocurre cuando el juez se encuentra un precepto normativo absolutamente contrario a la realidad social, a la moral imperante? Es cierto que en teoría hay acuerdo en que el Juez tiene absolutamente excluida la facultad de creación normativa *contra legem*, pero encontraremos que a menudo el Juez es impulsado a sobrepasar tales límites. Ojo, adviértase que no se trata de la declaratoria de inconstitucionalidad de una determinada norma vetusta o chocante contra la realidad moral imperante, sino de otros supuestos de inaplicación o sustitución de normas o de creación *pretoriana* de un derecho diverso, y hasta opuesto al de la Ley formal existente, que se ubican en la zona fronteriza entre lo autorizado y lo no permitido al Juez.

Destaca Berizonce¹⁸:

“... suelen presentarse al intérprete situaciones extremas en que la aplicación lisa y llana del precepto conduce también a conclusiones groseramente injustas, que repugnen los valores esenciales que están en la cúspide del ordenamiento. El Juez se encuentra ante un verdadero <estado de necesidad>, generalmente por imprevisión del legislador que omite derogar una norma anterior o sustituirla por otra más adecuada a las realidades presentes¹⁹.”

Cabe, finalmente, destacar dos importantes cuestiones en torno al aspecto comentado, por una parte es cierto que esa función creadora del derecho en todo caso se pone de manifiesto en la sentencia, con

¹⁸ *Opus cit.*, 388.

¹⁹ En nuestro país, aún dentro del anterior sistema encontramos claras manifestaciones de esa anomalía y atipicidad, pero que produjeron beneficios que nadie hoy pone en dudas, cuales son los casos de la interpretación de la Corte en la forma de hacer los cálculos de los lapsos procesales (cortos y largos - Sentencia Trejo Padilla) y la posición de haber aceptado y admitido, aún contra precepto de la Ley, el ajuste de los daños en casos de obligaciones de débito pecuniario (la célebre indexación).

virtualidad limitada al caso en concreto sometido a análisis y decisión, pero la otra cara de ese mismo asunto, resulta ser que, cuando por su buen sentido se hacen frecuentes y repetidos tales pronunciamientos, tales interpretaciones tienen cada vez más aceptación y por tanto se hacen repetitivas (se convierten en jurisprudencia) y adquieren cada vez más aplicación general -consecuencia del llamado “efecto expansivo” de las decisiones judiciales- y de tal manera, sin querer ni poder serlo, se convierten en precedentes que abstractamente rigen, de manera general para un número indeterminado de situaciones, y de allí la especial importancia que tenga el “activismo” de los jueces en éste ámbito, pero el grave peligro a que todo ello puede conducir.

Y he aquí otro particular caso en que cabe señalar que el Juez llamado a esa nueva función de juzgar debe ejercer ponderada y razonablemente la misión que tiene encomendada, pues de lo contrario se puede convertir en un tirano social, creador de normas voluntaristas y mutantes, aisladas de toda aceptación social, conformadoras del peligroso campo de la arbitrariedad descontrolada.

Cabe entonces hacerse nuevamente la pregunta ¿contamos con el elemento humano necesario para enfrentar estos nuevos derroteros? ¿no era preferible haber continuado bajo el viejo sistema de la jurisdicción de derecho, preparando a unos jueces activos y positivos activistas, llamados a mejorar y corregir los entuertos de la ley obsoleta y componedor razonable del conflicto cuya solución se ponía en sus manos?

IV. EL JUEZ COMO AMIGABLE COMPONEDOR

Otro papel y función que está llamado asumir el nuevo Juez, con o sin los cambios institucionales propuestos por el constituyente, es el nuevo rol que tiene como promotor de la composición del conflicto al margen del acontecer del procedimiento.

Es esta otra de las manifestaciones de su activismo positivo, se trata en verdad de procurar extinguir el conflicto de intereses por verdaderos medios alternativos de la vía jurisdiccional (conciliación, mediación y amigable composición), para brindar satisfacción adecuada a cierto tipo de controversias, como las denominadas de “coexistencialidad”, las de menor cuantía, aún cuando de subida importancia social.

Son en general conflictos en los que se persigue una decisión de equidad y sobre todo “no traumática” por la necesidad de mantener y no frustrar un vínculo de duración para que perviva mas allá del proceso y en los que la actuación del juez está encaminada a la composición equitativa de la litis, antes de la de un “trancher” que resolviendo para el pasado deje el sabor amargo de la ecuación entre el vencedor y el vencido.

El problema de tal papel no es sólo entenderlo y practicarlo, sino luchar contra los pobres esquemas vigentes de que con ello el juez compromete su neutralidad y por tanto pone en duda su imparcialidad, que siempre hemos criticado y objetado. La tendencia, es cada vez mayor por adoptar dichas fórmulas al menos para sistemas de justicia vecinal, o de pequeñas causas, que especialmente reivindiquen el rol de amigable composición de los jueces²⁰.

Nada de esto comporta como se lo ha pretendido por allí, la conveniencia de prescindir de los abogados y de los jueces letrados, volviendo a la primitiva justicia y puesta de manifiesto recientemente con la prohibición de que los abogados y juristas formen parte de los jurados en la nueva organización judicial penal venezolana.

Seguro quienes así piensan no han tenido oportunidad de leer las sabias palabras del maestro Satta cuando al referirse a la función del abogado frente al juez, señala: “el abogado conoce para hacer conocer; el juez conoce, según lo que le es hecho conocer”²¹.

V. OTRA MISIÓN DE ESE NUEVO JUEZ ES LA DE SER UN VERDADERO COLABORADOR DE LAS PARTES

Esta actividad encuentra especial consagración dentro de la ahora denominada justicia “auxiliadora o de colaboración o de acompañamiento”.

²⁰ Una expresa manifestación de dicho fenómeno, la encontramos en nuestra Justicia de Paz, si bien en la vigente Ley la figura del Juez se evapora entre la de un buen ciudadano conocedor de las realidades, más que en la de un buen hombre de leyes.

²¹ Salvatore Satta, Poesía e verità nella vita del notaio, Oración de los notarios, citado por Santiago Sentis Melendo, El abogado y la prueba, Libro Homenaje a Amílcar Mercader, Problema actual del Derecho Procesal, Editorial Platense, Argentina, 1971, p. 586.

Se caracterizan estas posturas, cuyos precisos límites, según lo anota Berizonce²² no están aún totalmente definidos, por la posición que asumen los jueces de apoyo y colaboración para con las partes, a través de la información y aún el auxilio técnico por órganos de la propia oficina judicial, que se brinda a las partes con el fin de compensar las desigualdades de los contrincantes, particularmente en aquellos conflictos de marcado interés social (laboral, menores, familia, seguridad social, alimentos) donde el papel del Juez toma especial importancia en todo lo relacionado con las etapas de preparación del proceso, pruebas, dentro de un esquema del proceso, necesariamente desformalizado, y al cual estamos seguros deberán hacer especial defensa esos nuevos jueces activistas para poder doblegar las posiciones antagónicas que impone el modelo del juez neutral tradicional, y so pena de no romper con la imparcialidad que debe prevalecer en los procesos.

Los seguidores de estas posturas, de más avanzada, hablan inclusive del Juez como verdadero Ingeniero social, participe calificado de las transformaciones del derecho y de la sociedad, pues ellos están llamados cada vez más a contribuir con el diseño de la nueva sociedad²³.

La función judicial no puede apartarse de las transformaciones históricas, sociales; la realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu y las instituciones de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérseles el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de diferente manera.

VI LOS NUEVOS PODERES DEL JUEZ EN EL PROCESO. LÍMITES DE DICHS PODERES ANTE LAS OBLIGACIONES Y CARGAS DE LAS PARTES

El nuevo texto constitucional²⁴ nos destaca que para lograr ese estado de justicia ideal, las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

²² *Opus cit.* p.368.

²³ Berizonce, *opus cit.* p 369.

²⁴ Art. 257 CN.

En tal sentido, finalmente, determina el constituyente: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

De cierto tenemos que señalar que nada lograríamos con esos destacados jueces activistas, conscientes de sus deberes profesionales y sociales, si no ponemos en sus manos los adecuados instrumentos para lograr en forma expedita la determinación de la verdad y con ello la justicia, para todo ello resulta obvio que debemos y tenemos que pensar en un nuevo proceso y en una reglas para su conducción adecuadas a los nuevos roles que pretendemos sean desempeñados por aquellos, todo dentro del respeto que debe mantenerse a los papeles, deberes y poderes de las partes, en el proceso civil.

Pero nuevamente nos toca destacar aquí que pretender endilgar responsabilidades al Poder Judicial, o a la deplorable justicia que se ha obtenido por no acatar esos lineamientos o actuar por los proceder contrarios a lo que se propugna debe ser obtenido con el nuevo ordenamiento, resulta igualmente injusto, y tan errada posición nuevamente puede provocar lamentables consecuencias al procurar que ellas se corrijen imponiendo trabas y reglas al funcionamiento del proceso y al actuar del Poder Judicial.

En efecto, se destaca que lo ideal será que los nuevos procesos sean sencillos, simples y uniformes, con todo lo cual seguros estamos no pueden haber opiniones disidentes.

Mas ¿son los jueces quienes fijan las reglas del proceso? ¿es que acaso no se ha dicho hartas veces que la función de legislar es cosa seria, no de politiqueros, ni de asamblea populares? ¿quiénes si no los políticos legisladores son los encargados de demorar las leyes que requiere urgente consagración, enredar los proyectos legislativos que se someten a su consideración para que en la práctica no produzcan los resultados deseados? ¿quiénes, si no los ignaros pretenden que una rama del Derecho, no es tal de no contar con un procedimiento adjetivo especial y separado del ordinario y común? ¿quién, si no nuestros ilustres legisladores, no han llenado de sin número de procesos, procedimientos, incidentes y trabas para lograr precisamente que se cumpla la justicia?

Definitivamente que esa vieja moraleja castellana de “Hechos y no buenas palabras” no tuvo seguidores en nuestra pasada flamante Asamblea Nacional Constituyente.

Y, si vamos al otro aspecto, a las formas, cabe otro tanto que decir. En primer lugar, debemos señalar que la forma no tiene objeción alguna dentro de ningún sistema en el que se ponga como valores a escoger la necesidad de obtener mecanismos ad hoc para proteger la seguridad y la certeza, con los de las formas esenciales que garanticen el debido ejercicio del derecho. Repetimos, formas, no ritualismos, destacamos, las reformas que al respecto introdujo nuestro vigente Código de Procedimiento, claramente ponen de manifiesto tales propósitos, el problema, una vez más estuvo y seguirá estando en la politiquería.

En efecto, se dice que el mal ejemplo en la materia comenzaba en el viejo estamento estatal, en la misma Corte Suprema y en el Recurso de Casación, la cual virtualmente, trabaja por así decirlo apegada más a latonería (vicios de forma y ausencia de formalidades del proceso) que a los problemas de fondo de los juicios. Pero nos preguntamos ¿Quién escogía los magistrados y qué criterios se siguieron para hacerlo? ¿Es que acaso no medraron en la Corte magistrados incapaces, ajenos a la sabiduría del Derecho, amigos de los políticos de turno, y quienes por supuesto, a manga ancha cumplían escasa o sobradamente con los deberes de su cargo dictando reposiciones y recursos de forma con lugar?

Y ¿es que acaso no son sólo las decisiones jurisprudenciales “voterías” (que dan, promueven o generan votos) las que nuestros señores legisladores toman en cuenta para modificar leyes absurdas con evidentes errores de promulgación?

Cuantas veces durante los años de vigencia del nuevo Código no se señalaron por la misma Sala de Casación, por la Doctrina y por los propios recurrentes los ¿destemplados errores en que se incurrió en la redacción del artículo que regulaba los requisitos y vicios de la sentencia. Nos preguntamos ¿si no bastó el escándalo de un juicio de un expresidente de la República para corregir algunas de esas disposiciones, podrá pretenderse que otras disquisiciones y comentarios de autores y especialistas logren esas modificaciones?

Finalmente, y ya anunciándonos lo que nos espera por este tortuoso camino de las novedades de lo que es Ley justa y Ley injusta ¿han tenido Uds. oportunidad de leerse algunas de nuestras recientes decisiones de la hoy Sala Social de nuestro Tribunal Supremo? ¿Sabían

Uds. que hoy, conforme reciente decisión del 16 de marzo pasado, las violaciones aún de orden público, no aparejan nulidad si los actos alcanzan su fin?

¿Conocen Uds. que ahora en dicha Sala primero se examinan las denuncias de fondo y luego las de forma?

Por igual, ¿se han enterado Uds. de que ahora procede por vía de aclaratoria, inclusive la reforma de oficio del contenido de fallos, ya firmes, cuando se detecta las evidencias de errores, que pueden ser subsanados por vía de enmienda, siempre que no se modifique el sustrato de la decisión de fondo y dado que de lo contrario pueden impedir la debida ejecución del fallo?²⁵

La verdad es que tenemos que congratularnos con los efectos de estos fallos, entendemos la valentía de los juzgadores de alzarse contra expresa norma en contrario, pero no deja de preocuparnos el que por esa vía se establezca: un indeseable poder derogatorio de nuestra nueva jurisprudencia y con ello estemos dando paso al bochínche y a la inseguridad jurídica.

Ya los sempiternos maestros del procesal, Camelutti, Calamandrei y Couture, entre otros, hace unos cuantos años, marcaban claros linderos en lo que tenía que ser el debido proceso, la importancia de las verdaderas formas procesales, el papel insustituible de las partes y sus apoderados en el juicio y los campos que a ellos estaba reservado, así como el destacado rol del verdadero juez como conductor del proceso²⁶. Pareciera que todo ello se olvida, que carece de fundamento ante el ímpetu de los cambios revolucionarios, ante el clamor de justicia, y la necesidad de que procuremos que ella se consiga no importa cómo ni a sacrificio de que.

²⁵ Sobre estas materias véanse dos interesantes fallos de la nueva Sala Social, fechados ambos el 16 de marzo del 2000, ambos siendo una de las partes Seguros Venezuela. Respecto a la nueva figura de permitir la revocatoria, inclusive enmendando e innovando elementos, ya existe un movimiento de Doctrina consolidado. Al respecto véase Peyrano, Jorge W, *Estado de la Doctrina Judicial de la Reposición in extremis*, en Revista de Estudios de Derecho Procesal, N° 2, Julio-diciembre 1999, Edit. Livrosca, Venezuela, 2000, Issn 13169777, p. 3 ss.

²⁶ Al respecto véanse Calamandrei, Proceso y Democracia, Carnelutti, Como se hace un proceso y Oviedo Arbelaez Amparo, *opus cit*, todo citados y comentados en nuestro mentado trabajo Las modificaciones de la Constitución Nacional..., p. 190 ss.

Esos nuevos lineamientos que impone la CN al proceso y a su modo de conducción, es cierto que en parte pueden reproducir algunos de los elementos e instituciones de los modelos de juicios contemplados en el todavía vigente Código de Procedimiento Civil de 1987, pero en verdad, no puede decirse que coincide o reproduce los modelos del juicio breve o del juicio oral contemplados en el actual Código de rito.

Son muchas, nuevas, claras y diversas las actitudes que caracterizan a ese nuevo proceso, y al Juez que debe dirigirlo y conducirlo y serán por igual diferentes las normas que deberá adoptar a la brevedad el legislador ordinario para adecuar el Código adjetivo a esas nuevas instituciones.

Pero el texto expreso de la nueva normativa constitucional, pone de manifiesto que el gran protagonista de los cambios deberá ser el Juez en el nuevo proceso, dependerá de la correcta instrucción de la causa el debido esclarecimiento de los hechos y la más ajustada decisión a la verdad.

Sólo un juez que asuma protagónicamente su rol activo de conductor del proceso, director y autoridad, puede garantizar los fines de ese proceso. Por ello se hace indispensable reconocer mayor intervención al Juez en la dirección del proceso, para ponerse en contacto con las partes, determinar con ellas los puntos en conflicto, favorecer la eventual conciliación y proceder con las partes a eliminar los aspectos accesorios, colaborar con la realización de la prueba (inclusive con iniciativa probatoria, etc.)²⁷

Por ello mismo al papel de las formas en el proceso se da su verdadero rol de instrumentabilidad de los logros de aquél, ellas deben ajustarse al fin mismo a que estos se enderezan, contribuir a la más efectiva realización del derecho, que no traducirse en el cumplimiento de ritos caprichosos, sino de vías adecuadas para acceder en la forma más presta a la verdad objetiva, todo con miras a lograr la concreción del valor justicia en cada caso.

Los jueces deben asumir el papel de dirección, gobierno y ordenación del procedimiento, para evitar que el mismo sea una especie de juego ficción librado a la habilidad ocasional de los litigantes, por ello

²⁷ Gelsi Bidart, *opus cit.* p. 444.

el juez necesariamente debe y tiene que estar dotado de poderes suficientes para encauzar la controversia, asegurando la igualdad de las armas y el contradictorio (debido proceso legal), en concreto velar por la concurrencia de los presupuestos procesales, ordenar adecuadamente el cumplimiento de los actos procesales, desmalezar el trámite e impedir y subsanar nulidades, prevenir y sancionar conductas maliciosas y temerarias, vigilar para que se procure la mayor economía procesal, etc.²⁸

Es cierto que la mayoría de las leyes procesales modernas otorgan tales instrumentos de conducción al Juez, pero por igual encontraremos que ello será insuficiente, cuando tales deberes por parte del Juez no son observados con toda la fuerza que ello requiere, en razón de prevalecer las enraizadas ideas sobre “neutralidad y pasividad judicial”. Un Juez activista, por oposición a dicha postura, debe ejercer en profundidad sus potestades desde que se inicia y hasta que termine el proceso.

El juez no debe ser un tirano, pero debe poseer las facultades necesarias para que su autoridad sea eficaz en todas las etapas del proceso, a lo largo del mismo y en su culminación.

VII. PODERES DEL JUEZ PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

En los países de tradición romano-canónica como la mayoría de los latinoamericanos, y entre ellos, por supuesto el nuestro, la llamada doctrina de la neutralidad del juez ha impuesto como dogma, la prevalencia del principio dispositivo, con la consiguiente limitación de las potestades judiciales en el campo probatorio de los hechos, la vinculación, y por ende la limitación de no poder actuar ex officio, en la actividad probatoria del contradictorio y la regla casi general del valor tasado de las pruebas por el Legislador, pero tales esquemas han quedado hoy superados, si bien es cierto que se respetan dogmáticamente asuntos relevantes como lo son la reserva del inicio de la acción al poder absolutamente particular, la fijación y determinación de los hechos, pero en todo lo demás obviamente que se han superado las viejas tra-

²⁸ Exposición de Motivos del Código Procesal Argentino (1867/68) citado por Berizzone, *opus cit.*, p. 372.

bas, y el Juez, hoy, abandonando los viejos esquemas de neutralidad se convierte en un indispensable instrumento técnico científico para la búsqueda y adquisición de las pruebas, sin que por ello se ponga en dudas la igualdad ni la neutralidad, todo lo cual se entronizó por vía de los llamados procesos sociales (trabajo, seguridad, familia, menores) y con ello nació la necesidad de acentuar la tutela de ciertos derechos y el auge de una verdadera función auxiliadora procesal, cuyo epicentro son los poderes del juez en el aporte probatorio y máxima conquista radica en la libre valoración de ese material.

Observamos que a pesar de todo lo dicho queda expresamente a reserva aún, la clara delimitación de los poderes del juez en lo que atañe, a las cargas y deberes de las partes de aportar los hechos y la prueba de los mismos, pues la función del juez no será la de cubrir la negligencia de las partes (debido proceso) ni sustituirse en deber de aportar los hechos adecuados, que integra la garantía de la bilateralidad y del debido proceso legal.

La misión de los jueces no será ocupar la posición de las partes en la faena probatoria, sino integrar, contribuir, complementar, si bien es cierto que día a día tiende a sustituirse ese lindero ante la exigencia de procurar el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos (ya ello por lo general tiene clara aceptación en procesos especiales como lo son los relacionados con las áreas del laboral, menores, familia, etc.). Todas estas tareas en adición se perfeccionan y mejoran con la irrenunciable y consustancial necesidad de la intermediación en los nuevos procesos orales y donde el juez tiene amplia oportunidad de ejercer debidamente esa potestad de auxilio en la actividad probatoria.

Todo lo anterior, viene apuntalado con las nuevas tendencias, cada vez de mayor aceptación, en conceder al juez la libertad de apreciación de las pruebas y el abandono de los sistemas de las pruebas tasadas.

VIII. EXTENSIÓN DE LOS PODERES DEL JUEZ PARA INTERPRETAR LA VERDADERA INTENCIÓN CONTRACTUAL DE LAS PARTES

No puede extrañar tampoco a los curiosos estudiosos de este tema, la tendencia, también actual, dentro del Estado social del bienestar, el

que cada vez más la Ley reconozca a los jueces potestades para inmiscuirse en los negocios jurídicos que anudan a las partes, partiendo de una concepción que entiende el vínculo obligacional como instrumento para la cooperación social, restringiendo con ello en cierto modo el señorío de la autonomía de la voluntad de las partes, siempre claro está bajo el señorío de los principios también recogidos legalmente de la buena fe en la contratación, la prohibición del abuso de los derechos, la confianza en la apariencia jurídica, el equilibrio del sinalagma de las contraprestaciones, el deber de colaboración y el de conservación de los bienes, etc.

Dentro de todo ese nuevo caudal de concepciones y teorías, el Juez adquiere un singular protagonismo que lo lleva a intervenir en la relación obligatoria, exorbitando la típica tarea de resolver la litis y convirtiéndose en verdadero experto arbitrador y componedor económico de los intereses en conflicto, actuando a menudo principios de equidad y de justicia distributiva. La ruptura del equilibrio de las prestaciones convenidas, la excesiva onerosidad sobrevenida, el fenómeno de la desvalorización de las monedas, etc., son, entre otros factores, operantes de la ineficacia o la frustración negocial, cuya recomposición se pone a cargo de los jueces²⁹.

El peligro en todos estos casos resulta ser no contar con jueces debidamente preparados y con ideas claras sobre su papel, o a falta de aquellos, de adecuadas normativas que regulen de modo específico cuando y como deben ser ejercidos esos poderes por los jueces, o cuando no pudiendo desconocer la realidad social y económica, aún sin preceptos que los faculten para ello, imponen a los jueces activistas, precisamente en resguardo de esa posición de vanguardia, el asumir la obligación de regular dichas materias, pronunciándose sobre ellas jurisprudencialmente, bajo una notable y notoria dosis de ponderación y sabiduría³⁰.

²⁹ Berizonce, *opus cit.*, p. 390.

³⁰ Al respecto véanse las serias advertencias de José Melich Orsini, en “La revisión judicial del contrato por onerosidad excesiva” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, N° 54. p. 96 ss e interesantes comentarios sobre el papel del juez en la interpretación de los contratos. *III Jornadas de Derecho Procesal Civil Dr. Aristides Rengel R.*, Obra ya citada, p. 37 y ss.

IX. LOS PELIGROS DE EXCESOS Y LOS LÍMITES RACIONALES A LAS POTESTADES QUE SE QUIEREN CONFERIR

Como puede apreciarse, de lo dicho y desarrollado hasta ahora, sostenido por reputada y consolidada doctrina, resulta que una mejor justicia, y una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, no solo se logra por la vía de ese cambio trascendental y peligroso, si bien reconocemos de avanzada, que resulta de conferir al Poder Judicial esa difícil y delicada tarea de aplicar la Ley, inclusive creando la que mejor se ajuste a la realidad social, la que resulte más equitativa de acuerdo al momento histórico, sino que por igual, con unos jueces debidamente capacitados, que cuenten con los mecanismos funcionales necesarios, que no se encuentren acogotados por el órgano judicial que los controle, perseguidos por la sociedad en la que se desenvuelven y a quien están llamados a servir que los juzga sin tomar en cuenta las carencias que le impone, ni presionados por las partes que pretenden dominarlos, o acosados por las necesidades y angustias económicas.

La primera de las vías, la que propone el cambio radical, subyugante, acorde a las más modernas posiciones doctrinarias, pero estamos convencidos no será más que una ilusión en el caso de nuestro país. Consideramos que hubiera resultado menos traumático y más fácil de lograr el que con jueces debidamente formados, produjéramos una justicia “más justa, expedita y racional” y con un Estado consciente de las necesidades de una tutela judicial más efectiva, contar con un Poder Judicial más completo, perfeccionado y adecuado a las crecientes necesidades del país, todo dentro del sometimiento a unas leyes modernas, aggiornadas, cuando menos, todo lo cual comportaba menos dificultad para su consecución.

En el mismo expresado orden de ideas de provocar un verdadero juicio de valor sobre todo lo que se está discutiendo, vale la pena examinar algunas de las posiciones en contra de los cambios que proponen en el nuevo texto constitucional.

1. La primera de las críticas que se hace a estos sistemas resulta ser contra el papel de los jueces de creadores de las normas de conducta, en tanto que con ello, se sostiene, se erosiona el principio de legalidad,

generando una brecha sensible que so color de equidad puede fácilmente degenerar en arbitrariedad.

El problema se torna más grave y álgido si por ejemplo se toma en consideración que con los cambios propuestos en la Constitución, se supone que *ipso facto* debe contarse con un poder legislativo, apto, competente y expedito, llamado a modificar una serie de leyes que obviamente deberán ajustarse a los nuevos principios. Obviamente que resulta ilusorio pensar que todo ello se producirá en un corto plazo y ni aún en el necesario para evitar el escándalo de las modificaciones jurisprudenciales, aún contra normas vigentes, que establezcan precisamente lo contrario de lo que se persigue con el nuevo estado de justicia.

Pero ¿Quid en el Interim? ¿Lo prudente es que esos jueces están llamados a llenar esos vacíos y tomen la iniciativa de pronunciar, propiciar y convalidar esos cambios por vía meramente jurisprudencial?

Para mitigar las serias objeciones que se hacen a que tales procedimientos arremeten contra la legalidad, se dice que quienes así piensan olvidan que el ordenamiento jurídico no se agota en la Ley, ni ésta puede ser ya concebida como la fuente acabada, omnicomprensiva y perfecta donde se prevén todas las soluciones.

Se dice en tal sentido, que la Jurisprudencia en cambio, permite flexibilizar los contenidos de la Ley, armonizarlos con otras fuentes jurígenas y, más aún, brindar soluciones adecuadas llenando las lagunas de la Ley e interpretándola mutativamente a partir de su letra y de su espíritu.

Concluye Berizonce señalando: "... así se evita la cristalización a que conduce el aferramiento indeliberado a su pura literalidad"³¹.

Pero nos preguntamos ¿Contamos con el elemento humano necesario para contar con una seria, responsable y valiosa fuente jurisprudencial del derecho?

2. Una segunda acerba crítica es la relacionada con que la creación del derecho en las manos de los jueces, atenta contra la seguridad jurídica. Esta se estremece porque las reglas jurídicas pierden su certeza, con lo que los derechos se toman imprevisibles, al quedar librados a una

³¹ *Opus cit.* p. 391.

interpretación errática y tan libre que hasta permite que sean mutados por la ulterior decisión del mismo juez.

3. Quienes así opinan, para los que postulan el activismo judicial, se valen de periclitadas posiciones garantistas conferidas a la Ley, a la cual se otorgan exclusivas finalidades de protección y represión, visualizando la misión del juez a partir del paradigma de su objetividad y neutralidad, visión históricamente emparentada con la tutela de los solos derechos patrimoniales, dentro del esquema de los Conflictos Interindividuales.

4. En verdad con el activismo judicial enmarcado en sus justos límites, no se enfrenta ni menoscaba la seguridad jurídica, que ya no puede entenderse como seguridad estática, sino dinámica, porque el contexto de pertenencia es precisamente fluido y cambiante por esencia, en un medio en que la sociedad y el Estado asumen roles que son acordes con esa realidad, de la cual, como se enfatiza por parte de la Suprema Corte Argentina, “los jueces no son fugitivos”³².

5. La inconveniencia de que con el otorgamiento de tales ilimitados poderes, se confiera a los jueces la determinación de “políticas de gobierno”.

Sin que afirmemos que quienes aprobaron tales cambios, hayan pensado en tales implicaciones, es obvio y así lo pone de relieve Berizonce en sus atinados comentarios sobre estos temas, que la atribución de tales poderes a los jueces, hace que en efecto se confiera al Poder Judicial un preponderante papel en el establecimiento de las políticas de gobierno, en los lineamientos filosóficos del mismo, y ello supone algo que para muchos, no puede ser, sobre todo si se toma en cuenta de que el nuevo equipo de gobierno no tenía al Poder Judicial en sus manos (ni sus manos en el Poder Judicial), aún cuando hoy, luego de los procedimientos, por demás indeseables, de podas y selección a dedo de los nuevos jueces, ha cambiado el panorama³³.

Efectivamente, se invoca por quienes adversan dicha posibilidad, que dejar en manos de los jueces que sean ellos quienes fijen las políti-

³² Berizonce, *opus cit* p. 392.

³³ Pero por igual y sin temor a equivocarnos consideramos que los nuevos hombres designados para tales cargos, no precisamente por vía de los proceder más aconsejables. no resultan ser precisamente los más capacitados ni quienes puedan representar esbozar e implantar las confusas filosofías por la que parecen transitar los nuevos gobernantes.

cas de gobierno, desarticula la división de los poderes, menoscabando las potestades legislativas y la primacía de los preceptos constitucionales, generando el llamado “imperialismo judicial”.

Creo que los gobernantes de turno, a mi modo de ver todavía sin saber la trascendencia de los cambios que aprobaron, no llegaron siquiera a pensar en tales problemas, y en todo caso, lo cual compartimos, muy a pesar de lo que se sostenga de nuestro poder judicial, el mismo sigue siendo el que Constitucionalmente está llamado a mantener el equilibrio orgánico del Estado, y por ello el texto supremo les confía el resguardo de la legalidad y la primacía de la protección de los preceptos constitucionales (art. 334 CN) y que en su evolución, ante la innegable macrocefalia de los otros poderes, al judicial indiscutiblemente le ha correspondido un correlativo ensanchamiento de las misiones jurisdiccionales.

En todo caso, aún ante las críticas que se hagan por la forma como se escogen los jueces, como lo demostró Cappelletti³⁴, la legitimación democrática de sus pronunciamientos, no proviene de tal acto, sino de la forma y método que aplican al dictado de sus decisiones y, además, a la receptividad y acatamiento de las mismas por la comunidad. Además la creatividad de los jueces no es limitada ni puede ser arbitraria, por el contrario reconoce límites y restricciones que la encuadran y surgieron casi siempre, de la prudente autolimitación (*self restraini, political questions, ex officio*).

En añadido a lo dicho, como lo sostiene Berizonce, en el caso del Poder Judicial no hay irresponsabilidad por sus actos, porque con el mismo funciona el control político (responsabilidad política), el disciplinario (responsabilidad disciplinaria) y el de la opinión pública (responsabilidad social), lo que no ocurre con tan prolífica sumisión en los demás Poderes³⁵.

Negar en todo caso capacidad a los jueces para resolver sobre asuntos de tal naturaleza, que solo dependen de sagacidad, prudencia y fino olfato político, es desconocerles cualidades por lo demás comunes en cualquier ciudadano, y a quienes debe presumirse cuando menos una

³⁴ Así lo afirma Berizonce, sin referir exactamente la fuente. *Opus cit.* p. 393.

³⁵ *Idem, Opus cit.* 393.

mayor dosis de aptitud para hacerlo, en tanto, por su oficio se les confía en específico la resolución de conflictos de mucha mayor entidad.

Lo cierto del caso, como concluye Berizonce³⁶ es que resulta notorio que en las sociedades contemporáneas de fines del pasado siglo, incluyendo la nuestra, el ciudadano común todavía piensa que el Poder Judicial, es quien tiene las soluciones no sólo para los conflictos individuales, sino también como gestor de los intereses públicos generales³⁷, a conciencia de que, en muchos casos, los otros poderes políticos, son incapaces de brindar tales soluciones.

Todo lo dicho, y aún cuando deja abiertas las interrogantes de quien controla a esos proclamados custodios, justifica el llamado movimiento de la “jurisdiccionalización de las disputas” cada vez más conocido en varias latitudes y países, y, que en todo caso, a favor de lo que todo ello implica, supone a favor del Poder Judicial, su sometimiento a los ya aludidos mecanismos de responsabilidad (política, disciplinaria y social - *vid supra*), ausentes en los demás poderes del Estado.

X. LA CLAVE PARA QUE TODOS ESTOS MECANISMOS FUNCIONEN Y TENGAN ÉXITO LOS NUEVOS O LOS ANTERIORES CONCEPTOS E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON LA JUSTICIA, EL PROCESO Y EL PODER JUDICIAL

La creación judicial en tanto proviene de una actitud discrecional³⁸ es legítima, si, además, exhibe un fundamento racional. Por ello,

³⁶ Idem, *Opus cit.* p. 393.

³⁷ Por lo demás así lo puso de manifiesto la posición de la entonces Corte Suprema de Justicia, la que, a pesar de los embates del nuevo gobierno, hasta que se promulgó la nueva Constitución, fue requerida y sus pronunciamientos sirvieron de gula, a fin de que la ciudadanía tuviera un cauce para fijar sus derroteros. Los gobernantes de los demás poderes, no dejaron jamás de considerar peligrosos los pronunciamientos de dicha entidad, lo cual demuestra que ante el pueblo resonaba el eco de sus decisiones, y ante los políticos adversarios, no dejaba de pesar la posibilidad de cualquier decisión en contra de sus posiciones y eventuales arbitrariedades. Aún hoy, a pesar de que se acusa al equipo del hoy Tribunal Supremo de su definida parcialidad por los que apoyan el gobierno de turno, el pueblo e inclusive los políticos de oposición siguen recurriendo al mismo para que fijen posiciones, impida atrocidades y restrinja los abusos que encuentra fundamento en las mayorías.

³⁸ “Intersticial”, en palabras de Holmes, tal como lo apunta Berizonce, *opus cit.*, p. 395.

la conducta del Juez en esa labor, debe y tiene que estar circunscrita a precisos criterios materiales y metodológicos, so pena de que se la repute arbitraria y caprichosa.

El verdadero problema que plantea la interpretación judicial creativa no radica en el método de hermenéutica a aplicar, sino más bien en lograr que la necesaria valoración que se contiene en la sentencia pueda ser calificada como objetiva, es decir verdadera, si se prefiere, científica.

Desde luego que la conciencia del Juez estará siempre presente en su decisión, pero de lo que se trata es que tenga fuerza de convicción por coincidir con las valoraciones -la conciencia jurídica- predominante en la comunidad. Y, que ello se demuestre con hechos perceptibles que pongan de manifiesto esa vigencia, a través de las llamadas fuentes del derecho.

Queda, pues, excluido todo voluntarismo autoritario del Juez, insuficiente para justificar el acto de creación pretoriana, como la recurrencia a simples eslóganes genéricos que no autorizan prescindir de la legalidad.

Y es precisamente en este aspecto que se requiere que nuestros hombres del Poder Judicial estén especialmente dotados de conocimientos, prudencia y sensatez, en todos los niveles e instancias. Los cambios que requiere la justicia y la equidad no son inventos, ni innovaciones sin fundamento, ni improvisaciones, las fuentes de la interpretación creadora cumplen con el fin esencial de dar objetividad a la sentencia.

Abrean, sea en los principios generales del derecho o que informan a las leyes análogas, en las costumbres o en los estándares comunes, o ya en la opinión de los juristas (Doctrina de los Autores) ... la decisión judicial no puede prescindir de los criterios científicos, ni contrariar las reglas de la técnica, aun cuando estos parámetros puedan variar con el momento y el lugar, y deben tener como fundamento por igual, las formas de manifestación del conjunto social, expresados mediante los llamados estándares comunes, que sin tener consagración en normas escritas, son de observancia consentida en el núcleo social. Pero por igual deberá tenerse presente, que esos estándares o conducta, si

son contra *legem*, aún encuentran rechazo para admitirlas como reglas derogatorias del derecho vigente.

Estos principios y reglas, producto de consagrada doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo Argentino, son válidos en todas las latitudes, y por ende perfectamente aplicables al caso nuestro.

Son de especial significación y cuidado, aquellos cambios e interpretaciones, cuando se ponen en juego valores similares de rango constitucional, que atienden a la necesidad de velar por su respeto para poder mantener el orden institucional e inclusive la adecuada protección de los mismos.

En la práctica hace pocos días atrás tuvimos la oportunidad de enfrentar un pronunciamiento de nuestra Sala Político Administrativa, la cual en un pronunciamiento cautelar, anticipativo, sin más miramientos pone por sobre toda otra consideración el derecho a la educación, aun cuando con el pronunciamiento en el caso concreto, se atropella la cosa juzgada impuesta en un fallo del mismo Supremo Tribunal, en el cual por igual se sostiene y resguarda la necesidad del orden y tempestividad de los actos que deben cumplirse para tener derecho a esa educación, so pena de producirse el caos y desconcierto social³⁹.

Es allí donde se requiere de Jueces prudentes, sensatos y maduros, alejados de todo furor político, de todo ánimo de cambiar por cambiar o de cambiar por repudiar lo que antes existía.

Pero en adición a lo dicho, de la necesidad del fundamento racional de los actos del poder judicial, se hace necesario por igual el empleo de adecuados principios metodológicos, de observancia por igual inexcusable y que tienden a acentuar ciertas características comunes a la Ley.

Veamos:

a) En primer lugar, la interpretación objetiva reniega de cualquier subjetivismo o voluntarismo individual que conduciría a una descalificable arbitrariedad.

b) El presupuesto de racionalidad en la labor intelectual es no menos esencial. La sentencia –ni siquiera la ley– es un *fiat* arbitrario

³⁹ Caso Amparo Constitucional Fiscalía de la República vs. Colegio H. Clay, aun pendiente de decisión de fondo Sala Político Administrativa, Tribunal Supremo de la República. Abril 2000.

emanado del Juez, sino que por esencia ha de ser un producto de la razón. La fundamentación racional remite a las leyes de la sana razón (sana crítica), a las reglas del recto entendimiento humano, a la lógica y a la propia experiencia.

Son execrables en tal sentido los fallos carentes de fundamentos, los fundados en razones caprichosas, con omisiones sustanciales para la adecuada solución del pleito, los que incurren en manifiesta irrazonabilidad o que se apoyan en fundamentos claramente insostenibles⁴⁰.

d) El adecuado activismo judicial es tendencialmente proclive a la generación, a través de sentencias, de establecer reglas generales abstractas, al modo de la Ley. El *dictum* apunta siempre, además de a la solución del caso, a implementar recomendaciones más o menos explícitas sobre directivas de conductas institucionales o comunitarias.

e) La creatividad judicial solo se legitima, en último análisis, por la aceptación y el consenso que recogen las decisiones en el seno de la comunidad a la que están destinadas. Aun cuando el juicio público no siempre es fácilmente perceptible y su veredicto a menudo no resulta mensurable, no puede negarse su trascendencia⁴¹.

f) Todos los anteriores presupuestos metodológicos, señala Berizonce, serían insuficientes, sin embargo, si se omitiera satisfacer el deber político jurídico de motivar la decisión, explicitando el raciocinio llevado a cabo por el Juez el emitir el juicio de valor que representa la sentencia.

“La motivación es presupuesto democrático y republicano de su validez, posibilitando el control de la actividad jurisdiccional, no solo en relación a las partes, que tienen derecho a exigirlo, y están habilitadas para reclamar su revisión, sino también para la comunidad –juez de jueces– por la responsabilidad política, social y moral comprometida”⁴².

⁴⁰ Principios jurisprudenciales extraídos de fallos de la Corte Argentina, citados en Berizonce, *opus cit.* p. 398.

⁴¹ Lamentablemente esto es poco tornado en cuenta en el ámbito judicial nacional, en todos los niveles y grados de las manifestaciones jurisdiccionales. De allí que hemos insistido siempre en la conveniencia de mantener adecuados medios de información en los que se hagan comentarios favorables o no a fallos y decisiones de los órganos judiciales, en tal forma, la colectividad tiene un importante medio de control sobre el proceder de los jueces.

⁴² Berizonce, *opus cit.* p. 399.

XI. CONCLUSIONES

Como puede apreciarse, la nueva Constitución fija y exige acatar nuevos principios, conceptos y posiciones ante la función del Juez, el concepto de Justicia, aplicación de la equidad, y en todo ello supone y requiere un definitivo cambio de actitudes y conductas en nuestros hombres vinculados a la Justicia: Jueces, abogados y justiciables.

La tarea que corresponde iniciar no es nada fácil, ni puede considerarse cuenta con los mecanismos de implementación más adecuados. Notaremos seguramente a corto plazo la gravedad de no haber formado un Poder Judicial siquiera medianamente capacitado, nos arrepentiremos de la selección y destitución de jueces a dedo y porrazo, como hemos estado acostumbrados a que se lo haga.

No desearía tener la razón, pero creo que lamentablemente lo apresurado de los cambios propuestos y la forma como se ha pretendido imponerlos, de manera general, sin tomar en cuenta limitaciones obvias, creo que impedirán el triunfo quizá de buenas ideas, que han dado apetecibles resultados en otras latitudes, donde por lo demás se contaba con un Poder Judicial mucho más competente y preparado que el nuestro.

Por todo lo dicho una vez más llamo la atención sobre lo que nos ha entregado en esta materia la ilustre Asamblea Nacional Constituyente, no sé si consciente o inconscientemente. Ojalá que la prudencia y la sensatez priven en algunos de los hombres que tienen en sus manos ahora la aplicación de la justicia, sobre todo al más alto nivel de nuestro Supremo Tribunal, en el cual por lo demás hemos visto tomar derroteros de difícil aplicación e inteligencia, que aún investidos de las más puras intenciones y adecuados a novísimas posiciones doctrinarias, chocan no sólo con preceptiva legal vigente todavía, sino que atentan contra realidades nacionales que no pueden quedar pretermitidas, más en una Venezuela hoy llena de problemas y con un cuadro económico deplorable, a pesar de los múltiples recursos con los que nos ha dotado la noble naturaleza.

Quiera que la irresponsable alegría de muchos por esos inesperados cambios, no se tome en lamentos y llantos para las futuras generaciones.

Estábamos y seguimos estando convencidos que los cambios necesarios en la administración de justicia, no van por el camino de conceder a nuestro aún incipiente Poder Judicial responsabilidades que están aún lejos de su formación y experiencia, seguimos convencidos que primero que todos esos cambios, es menester formar y apoyar a los hombres de nuestro poder judicial, ennoblecer la función justicia, despolitizarla, y todo ello, aún con los nuevos derroteros que se han fijado a la Justicia, al Proceso y al Poder Judicial, lo vemos lejano y extraño a tales modificaciones.

Me será profundamente reconfortante saber que he podido dejar en Uds. las inquietudes que todos estos problemas me han venido procurando desde el momento mismo en que se comenzó a publicitar sobre los cambios en nuestro Poder Judicial así como todo lo que atiende a la Justicia y que lo expuesto les sea de utilidad para profundizar más en el estudio de dichos temas.

BIBLIOGRAFIA

- ALVARADO VELOSO, Adolfo. *El Juez, sus deberes y facultades, Los derechos procesales del abogado frente al Juez*, Edit. Depalma, Argentina, 1982.
- ARAZI, Raúl. *El proceso civil de fin de siglo en Derecho Procesal Civil en vísperas del Siglo XXI*, Editorial Ediar, Argentina, 1997.
- AUTORES VARIOS, *Problemática actual del Derecho Procesal, Libro Homenaje a Amilcar Mercader*, Coordinador Augusto M. Morello, Morello, Antonio, Morello, Augusto, Gelsi Bidart, Adolfo, Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto y otros, Editora Platense, Argentina, 1971
- BAUMEISTER TOLEDO, Alberto José. “Las modificaciones de la Constitución Nacional. Aproximaciones en torno a algunos de sus efectos, en especial en lo atinente a los conceptos de “Norma Jurídica, Justicia, Administración de Justicia, Función del Poder Judicial y Proceso”, entre otros,” Apéndice en la obra, *III Jornadas de Derecho Procesal Civil, Aristides Rengel Romberg*, Edit. Fundación F. Pérez Llantada SJ y Fondo Edit. Ucab, Caracas, 2000.
- , “Algunas consideraciones sobre el fin del Proceso. La verdad procesal y la verdad material histórica. El objeto de la prueba en el proceso civil. Control de la actividad judicial en el juzgamiento” en *Anuario de ARCA*, 1994, Edit. Jurídica Alva, Venezuela, 1995.

- BERIZONCE, Roberto. *Derecho Procesal Civil actual*, Librería Editora Platense y Abeledo Perrot, Argentina, 1999, Isbn 950-20-1187-2
- , *La enseñanza del Derecho Procesal y Tutela Anticipada y Definitoria, ambos en Derecho Procesal Civil en vísperas del Siglo XXI*, Editorial Ediar, Argentina, 1997.
- CALAMANDREI, Piero. *Estudios sobre el Proceso Civil*, Traduce. De Santiago Sentís M., Edit. Bibliográfica Argentina, Argentina, 1945.
- , *Proceso y Democracia*, Traduc. de Felix Fiz Zamudio, Edit. Ejea, Argentina, 1960.
- , *Los Estudios de Derecho Procesal en Italia*, Traduc. Santiago Sentís M., Edit. Ejea, Argentina, 1959.
- , *Opere Giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, Morano Editore, Italia, 1965, Seis volúmenes.
- CAPPELLETTI, Mauro. *Le puvoir des Juges*, Trad. de René David, Edit. Economica, Presesses Universitaires D' Marseille, Francia, 1990.
- CARNELUTTI, Francesco, *Derecho y Proceso*, Traduc. de Santiago Sentís Melendo, Edit. Ejea, Argentina, 1971, tres volúmenes.
- , *Sistema de Derecho Procesal Civil*, Traduc. Niceto Santiago Sentís Melendo, Edit. Uteha, Argentina, volúmenes.
- , *Instituciones del Proceso Civil*, Traduc. de la Va Edición Italiana, por Santiago Sentís Melendo, Edit. Ejea, Argentina, 19590, tres volúmenes.
- , *Como se hace un Proceso*, Trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Rendín, Edit. Ediciones Jurídicas Europa América, Argentina, 1959.
- CHIOVENDA, Giuseppe, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, Traduc. y notas de Derecho Español por E. Gómez Orbaneja, Edit. Revista de Derecho Privado, España, Tres volúmenes, 1954.
- COSSIO, Carlos, *El Derecho en el Derecho Judicial*, Segunda edición, Abeledo Perrot, Argentina, 1959.
- COUTURE, Eduardo J., *Estudios de Derecho Procesal Civil*, Edit. De Palma, Argentina, 1978, tres volúmenes.
- ENTRENA KLETT, Carlos Maria, *La Equidad y el Arte de Juzgar*, 2a. Edición, Edit. Aranzadi, España, 1990.
- GELSI BIDART, Adolfo, "Proceso y época de cambio," en Libro Homenaje a Amílcar Mercader, *Problemática actual del Derecho Procesal*, Editora Platense, Argentina, 1971, p. 421 ss.
- HERRENDORF, Daniel E., *El Poder de los Jueces, Como piensan los Jueces que piensan*, Abeledo Perrot, Argentina, 1998, 3a edición actualizada.

- MORELLO, Augusto M., *La Reforma de la Justicia*, Librería Platense, Argentina, 1991, Isbn 950-536-040-1. Constitución y Proceso, La Nueva Edad de las Garantías Jurisdiccionales. Edit. Abeledo-Perrot, Argentina, 1998.
- OVIDO ARBELÁEZ, Amparo Alicia, *Proceso, Justicia y Libertad*, Publicación de la Pontificia Universidad Javeriana, Colección Profesores, N- 23. Edit. Javegraf, Colombia, 1997.
- PEYRANO, Jorge W., “Estado de la doctrina judicial de la reposición in extremis, Muestreo Jurisprudencial.” En *Revista de Estudios de Derecho Procesal* N° 2, Jul - Dic. 99, Edit. Livroscaj Invedepro, Venezuela, 2000, Issn 1316-9777, P 3 ss.
- PICARDI, Nicola, “II mutamenti del ruolo del giudice nei nostri tempi,” en *Derecho Procesal en vísperas del siglo XXI, Temas Actuales en memoria de los Profesores Isidoro Eisner y Joaquín A. Salgado*, Editorial Ediar, Argentina, 1997, p. 397.
- VELÁSQUEZ, Juan G, BRISEÑO S, Humberto, DEVIS ECHANDÍA, Hernando, y otros, *Derecho Procesal Moderno*, Editorial Biblioteca Jurídica Dike-Univer. Pontificia Bolivariana Panamericano de Derecho Procesal, 1988.